

PERIODICO



OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO

SEGUNDO SEMESTRE

LAS LEYES DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE
EN ESTE PERIODICO

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO NUM.:001-1082

CARACTERISTICAS: 113182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

DIRECTOR RESPONSABLE EL C. SECRETARIO GRAL. DEL GOBIERNO DEL EDO.

SEGUNDO SEMESTRE

S U M A R I O

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

- DECRETO No. 161.- Que contiene LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE DURANGO.-..... PAG.750
- DECRETO No. 162.- Por el cual se autoriza al Municipio de Canelas, - Dgo., para que por conducto de su Ayuntamiento Municipal, gestione y contrate con BANOBRAS, S.N.C., en uso de los recursos propios del Banco el otorga miento de un Crédito hasta por la suma de - - - - \$ 219,000.00, el cual se destinará a cubrir el costo de la adquisición de dos camionetas, una Pick-Up de 8 cilindros y otra de 3 toneladas.-..... PAG.757
- DECRETO No. 163.- Por el cual se reforman los Artículos 2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,14 y 15 de la LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA FRUTICULTURA PARA EL ESTADO DE DURANGO.-..... PAG.758
- Decreto No. 164 Por el cual se le otorga el Galardón denominado -- "PRESEA FRANCISCO VILLA" mismo que consiste en una medalla y un diploma "A LA VIRTUD Y AL MERITO". A la C. ANICETA CARDEÑAS OROZCO DE ROSALES..... PAG.760
- SOLICITUD.- Que elevan ante el C. Gobernador Constitucional -- del Estado, los Ejidatarios y Vecinos del Ejido -- Veracruz de la Sierra, Municipio de San Dimas, Dgo para que se les conceda una concesión de Transporte.-..... PAG.764

EL CIUDADANO LICENCIADO MAXIMILIANO SILERIO
ESPARZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE DURANGO, a sus habitantes, --
s a b e d:

Que la H. Legislatura del mismo se ha ser-
vido dirigirme el siguiente:

Con fecha 30 de Agosto del año en curso, el Titular del Poder Ejecutivo, envió a esta H. LX Legislatura Local, Iniciativa de Decreto, que contiene LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, integrada por los CC. Diputados Néstor Jesús Vargas Pérez, Jesús Davila Valero, Javier Corral Corral, Jesús Rene Sosa Curiel y Javier Covarrubias Vázquez, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, mismos que emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Comisión, al analizar y estudiar la Iniciativa, encontró que efectivamente la H. LVIII Legislatura aprobó la creación del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Durango, mediante Decreto No. 54 de fecha 29 de Diciembre de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del Estado 23 Bis, de fecha 22 de Marzo de 1990, como respuesta a la necesidad de contar con mecanismos tanto jurídicos como operativos para proteger la vida, el patrimonio de la población y el medio ambiente, frente a la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, creando organismos responsables cuya función primordial, es prevenir, diagnosticar, planear y coordinar las tareas y acciones de los sectores público, privado y social respecto a la prevención, auxilio y recuperación, en caso de alguna catástrofe.

SEGUNDO.- Que a partir de la vigencia del Decreto que creó el referido Consejo, se han venido realizando diferentes actividades y estrategias en materia de protección civil dentro de nuestro Estado, sin embargo, ha quedado de manifiesto la existencia de limitantes normativas para la acción de los organismos del propio Consejo, que impiden la conformación integral de un verdadero y real sistema de protección civil.

TERCERO.- Que el Decreto en mención, no contempla, entre otros rubros, lo relativo a los sistemas municipales, a las unidades internas de las empresas públicas o privadas, a la coordinación de los Sistemas Estatal y Municipales, a los procedimientos para la declaración de emergencia o de zona de desastre, incluyendo a la denuncia popular, todo ello, en desventaja para estar en condiciones de brindar una protección eficaz que requiere la comunidad duranguense y además para prevenir y evitar que la realidad rebase la capacidad de respuesta del Sistema Estatal de Protección Civil; de tal manera que con la nueva ley que se propone, se

busca además, una verdadera coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales con los sectores privado y social, todo ello, en beneficio de la comunidad, ya que se dará mayor celeridad a las acciones que son necesarias y que reclama la población, por lo que la Comisión que dictaminó, consideró de gran importancia la preocupación mostrada por el Titular del Poder Ejecutivo Civil, al proporcionar con la nueva Ley de Protección Civil, una mejor seguridad, velando por la tranquilidad de nuestra sociedad, garantizando las condiciones indispensables para el desarrollo económico, político y social, especialmente cuando existe el riesgo latente de producirse un fenómeno destructivo de origen natural o provocado por la actividad del hombre, ya que la finalidad es que nuestra entidad cuente con una Ley de Protección Civil, que logre una efectiva participación de las diversas instancias, asumiendo cada una la corresponsabilidad que les compete para lograr un sistema integral de Protección Civil.

Con base en los anteriores considerandos la H. LX Legislatura del Estado, expide el siguiente:

DECRETO No. 161

LA HONORABLE SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en la Entidad, siendo su observancia obligatoria para todas las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o privado, grupos voluntarios y en general para todos los habitantes del Estado.

ART. 2.- Se entiende por Protección Civil al conjunto de principios, normas y procedimientos a través de cuya observancia el Gobierno y la sociedad, llevan a cabo acciones para proteger la vida y el patrimonio de la población, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente, frente a la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos. Son autoridades en materia de protección civil:

- I.- El Consejo Estatal de Protección Civil;
- II.- La Unidad Estatal de Protección Civil;
- III.- Los Consejos Municipales de Protección Civil; y
- IV.- Las Unidades Municipales de Protección Civil.

ART. 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

- I.- Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Protección Civil;
- II.- Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Protección Civil;
- III.- Sistema Municipal: A los Sistemas Municipales de Protección Civil;
- IV.- Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil;
- V.- Consejo Municipal: A los Consejos Municipales de Protección Civil;
- VI.- Programa Estatal: Al Programa Estatal de Protección Civil;
- VII.- Programa Municipal: A los Programas Municipales de Protección Civil;
- VIII.- Protección: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre;
- IX.- Prevención: Acciones dirigidas a controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente;
- X.- Auxilio: Acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la planta productiva, y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente ante la presencia de un agente destructivo. Estas acciones son de: alertamiento; evaluación de daños; planes de emergencia; coordinación de la emergencia; seguridad; búsqueda; salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud; aprovisionamiento; comunicación social de emergencia; reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad;
- XI.- Recuperación: Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en la evaluación de los daños ocurridos, en el análisis y la prevención de riesgos y en los planes de desarrollo económico y social establecidos;
- XII.- Apoyo: Conjunto de actividades administrativas, sobre las cuales se sustentan la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante situaciones de desastre;
- XIII.- Grupos Voluntarios: A las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan con los conocimientos y equipos necesarios y presten sus servicios en acciones de protección civil de manera comprometida, sin recibir remuneración alguna;
- XIV.- Brigadas Vecinales: A las organizaciones de vecinos que participan en las acciones de protección civil;
- XV.- Agentes Destructivos: A los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, socio-organizativo u otros que pueden producir riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre. También se les denomina fenómenos perturbadores;
- XVI.- Riesgo: Probabilidad de peligro o contingencia de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo;
- XVII.- Alto riesgo: Inminente o muy probable ocurrencia de un desastre;

XVIII.- Emergencia: Situación derivada de fenómenos naturales, actividades humanas o desarrollo tecnológico que pueden afectar la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente, cuya atención debe ser inmediata;

XIX.- Desastre: Evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella sufre daños severos tales como: lesiones a la integridad física de las personas, pérdida de vidas, afectación de la planta productiva, daños materiales o al medio ambiente, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad;

XX.- Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad; y

XXI.- Damnificado: Persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de consideración, provocados directamente por los efectos de un fenómeno perturbador; también se considerarán damnificados a sus dependientes económicos. Es aplicable este concepto a la persona que por la misma causa haya perdido su ocupación o empleo, requiriendo consecuentemente del apoyo gubernamental para sobrevivir en condiciones dignas.

ART. 4.- Corresponde al Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales:

I.- La aplicación de esta Ley y de los ordenamientos que de ella se deriven en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporando la participación de la sociedad civil;

II.- Crear el Fondo Estatal, para la atención de emergencias originadas por un alto riesgo o desastre. La creación de este Fondo se hará conforme a las disposiciones presupuestales aplicables;

III.- El Gobernador del Estado dispondrá la utilización y destino de los recursos de los respectivos Fondos, una vez que se hayan agotado los procedimientos establecidos en los Capítulos IX y X de esta Ley, según sea el caso; y

IV.- Superada la emergencia o desastre, el Gobernador del Estado informará al Congreso Local la utilización y destino de los recursos. Los Presidentes Municipales harán lo propio con los Ayuntamientos, en sesión de Cabildo y a la Legislatura Estatal, si ésta lo requiere.

ART. 5.- En la Ley de Egresos del Gobierno del Estado, se contemplarán las partidas que se estimen necesarias para el cumplimiento de las acciones que establece la presente Ley, y las que se deriven de su aplicación, mismas que no podrán ser reducidas en ningún caso y por ningún motivo.

ART. 6.- El Consejo Estatal de Protección Civil, solicitará la colaboración de los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos establecidos en la Entidad, para orientar y difundir oportuna y verazmente información en materia de protección civil.

ART. 7.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios, propietarios o copropietarios de inmuebles y empresas, que por su uso y destino tengan o reciban una afluencia masiva de personas, están obligados a elaborar un programa interno de protección civil, contando para ello con la asesoría técnica de las unidades municipales o de la Unidad Estatal, en su caso.

ART. 8.- Toda persona que habite en el territorio estatal, está obligada a informar a las autoridades, según su leal entender, sobre fenómenos, hechos, actos u omisiones que puedan causar un riesgo, emergencia o desastre. También está obligada a colaborar con las diversas instancias del Gobierno en las acciones de protección civil.

ART. 9.- Toda empresa pública o privada cuya actividad sea asesorar en materia de protección civil, deberá registrarse ante la Unidad Estatal y Municipal correspondiente, debiendo recabar de éstas, la autorización para el ejercicio de sus funciones.

ART. 10.- Todas las dependencias estatales, municipales y las delegacionales de la Administración Pública Federal, de acuerdo a su propia normatividad, así como todos los ciudadanos residentes o de paso por el Estado, tienen el deber de cooperar con las autoridades para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

ART. 11.- En todas las edificaciones, excepto en casas habitación unifamiliares, se deberá colocar en lugares visibles, señalización adecuada e instructivos para casos de emergencia, en los que consignarán las reglas a observarse, antes, durante y después del desastre; así mismo, deberán señalarse las zonas de seguridad y salidas de emergencia.

ART. 12.- Las autoridades estatales y municipales promoverán la creación de órganos especializados de emergencia, según sea la mayor presencia de riesgos ocasionados en una determinada zona por cualquiera de los tipos de fenómenos perturbadores.

ART. 13.- Las disposiciones en materia de protección civil que se contengan en otros ordenamientos estatales, serán complementarias con esta Ley.

CAPITULO II DEL SISTEMA ESTATAL

ART. 14.- El Sistema Estatal, parte integrante del Sistema Nacional, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público estatal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados, así como con las autoridades municipales a fin de llevar a cabo acciones de común acuerdo, destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se presenten en la eventualidad de un desastre.

ART. 15.- Son objetivos del Sistema Estatal:

I.- **Básico:** Proteger a la población ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la comunidad.

II.- **Generales:**

a).- Afirmar el sentido social de la función pública de protección civil, integrando su programa en las acciones del desarrollo del estado;

b).- Establecer, fomentar y encauzar una nueva conciencia y actitud de la población en materia de protección civil, para motivar en momentos de riesgo, emergencia o desastre, una respuesta eficaz, amplia, responsable y comprometida;

c).- Integrar la acción del Estado y los municipios, para organizar y mejorar su capacidad de respuesta ante un riesgo, emergencia o desastre;

d).- Establecer, reforzar y ampliar el aprovechamiento de las acciones de prevención para conocer y reducir los efectos destructivos ante la eventualidad de un desastre;

e).- Realizar las acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias de los efectos destructivos en casos de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre;

f).- Informar oportunamente a la población de la existencia de una situación probable de alto riesgo, a efecto de tomar las medidas adecuadas; y

g).- Las demás que sean afines a las anteriores y que coadyuven en la mejor atención del Programa y acciones de protección civil, que se emprendan y realicen en el Estado.

ART. 16.- El Sistema Estatal está integrado por el Gobernador del Estado, el Consejo Estatal, la Unidad Estatal de Protección Civil, las dependencias de la Administración Pública Estatal, los Sistemas Municipales y los grupos voluntarios.

ART. 17.- La coordinación ejecutiva del Sistema Estatal recaerá en la Secretaría General de Gobierno.

CAPITULO III DEL CONSEJO ESTATAL

El Consejo Estatal es el órgano de consulta y de coordinación de acciones del Sistema Estatal.

ART. 19.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno y de la Entidad para integrar, concertar e inducir las actividades de los diversos participantes e interesados en la protección civil, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal;

II.- Fomentar la participación comprometida y responsable de todos los sectores de la sociedad en la formulación y ejecución del Programa Estatal y de los programas especiales destinados a satisfacer las necesidades de protección civil del Estado;

III.- Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a su autonomía, la participación de los municipios y a través de éstos o de manera directa la de los diversos grupos sociales de la Entidad, en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en la materia;

IV.- Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil;

V.- Aprobar y evaluar el Programa Estatal y coadyuvar en su aplicación, procurando además, su más amplia difusión en la Entidad;

VI.- Promover la generación de una cultura de protección civil, gestionando ante las autoridades correspondientes su incorporación en el Sistema Educativo Estatal;

VII.- Vigilar la adecuada aplicación de los recursos que se asignen a la Unidad Estatal de Protección Civil;

VIII.- Coadyuvar en la integración de los Sistemas Municipales de Protección Civil;

IX.- Aprobar y evaluar el Programa Estatal;

X.- Elaborar, publicar y distribuir material informativo de protección civil, a efecto de difundirlo con fines de prevención y orientación;

XI.- Conocer y coordinar con pleno respeto a sus respectivas atribuciones, la participación de las dependencias federales establecidas en la Entidad;

XII.- Participar en forma coordinada con las dependencias federales y con las instituciones privadas y del sector social, en la aplicación y distribución de la ayuda nacional e internacional que se reciba en caso de alto riesgo, emergencia o desastre;

XIII.- Evaluar la situación de desastre, la capacidad de respuesta de la Entidad, y en su caso, la procedencia para solicitar apoyo al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación;

XIV.- Constituir las comisiones que estime necesarias para la realización de sus objetivos;

XV.- Recibir y evaluar el informe anual de la Unidad Estatal de Protección Civil; y

XVI.- Las demás atribuciones afines a éstas, que le sean encomendadas por el Gobernador del Estado.

ART. 20.- El Consejo Estatal se integra por:

I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;

II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno;

III.- Un Coordinador Administrativo, que será el Director General de Gobernación;

IV.- Un Secretario Técnico, que será el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil;

V.- Un Representante del Congreso del Estado;

VI.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que por el ramo que atienden les corresponda participar en las acciones de protección civil;

VII.- Los delegados o representantes de las dependencias y entidades federales que actúen en el Estado y cuyas funciones se relacionen con las acciones de protección civil;

VIII.- Los representantes de las organizaciones sociales, instituciones académicas, grupos voluntarios y organismos especializados; y

IX.- Los Presidentes Municipales o sus representantes, así como los titulares de dependencias u organismos municipales que se relacionen con las actividades de protección civil, se integrarán al Consejo cuando en una sesión esté programado tratarse asuntos relacionados con situaciones de riesgo para la comunidad, localizadas dentro de la circunscripción territorial del municipio de que se trate. Tendrán voz y voto en el acuerdo específico que corresponda.

Por cada Consejero Propietario, se designará un suplente que lo substituya en sus faltas temporales.

ART. 21.- El Consejo Estatal celebrará dos sesiones ordinarias anualmente y las extraordinarias que se requieran, a convocatoria de su Presidente.

ART. 22.- Corresponde al Presidente del Consejo Estatal:

I.- Presidir las sesiones;

II.- Proponer la integración de las comisiones de trabajo que se estimen necesarias;

III.- Hacer la declaratoria formal de emergencia o zona de desastre;

IV.- Autorizar:

a).- La puesta en operación de los programas de emergencia para los diversos factores de riesgos;

b).- La difusión de los avisos y alertas respectivas; y

c).- El desalojo de zonas potencialmente peligrosas.

V.- El Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, activará el Centro Estatal de Operaciones de acuerdo a la gravedad del riesgo, emergencia o desastre; y

VI.- Las demás que le confieren la presente Ley.

ART. 23.- Las comisiones que constituya el Consejo Estatal, según la fracción II del artículo anterior, podrán tener el carácter de permanentes o temporales para desarrollar acciones específicas y se conformarán por:

I.- Los integrantes del Consejo Estatal;

II.- Los representantes de las dependencias y organismos públicos federales ubicados en la Entidad, estatales y municipales que sean convocados;

III.- Los representantes de entidades y organismos privados a quienes se solicite su participación;

IV.- Los representantes de instituciones académicas y colegios de profesionistas;

V.- Investigadores especialistas en materia de protección civil; y

VI.- Representantes de grupos voluntarios o personas que estén en condiciones de coadyuvar con los objetivos del Sistema Estatal.

ART. 24.- Corresponde al Secretario Ejecutivo:

I.- En ausencia del Presidente, presidir las sesiones y realizar las acciones que le competan a aquél;

II.- Formular el orden del día para cada sesión;

III.- Dar seguimiento a las disposiciones y acuerdos del Consejo Estatal;

IV.- Certificar las actas del Consejo Estatal y dar fe de su contenido;

V.- Presentar al Consejo Estatal el Programa Estatal;

VI.- Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo Estatal;

VII.- Ejercer la representación legal del Consejo Estatal; y

VIII.- Las demás que le confieran la presente Ley y las que provengan de acuerdos del Consejo Estatal y/o su Presidente.

ART. 25.- Corresponde al Coordinador Administrativo:

I.- Suplir al Secretario Ejecutivo, en sus ausencias;

II.- Implementar administrativamente la ejecución de los acuerdos y disposiciones del Consejo Estatal, registrándolos y sistematizándolos para su seguimiento;

III.- Ejecutar todas las actividades administrativas del Consejo Estatal;

IV.- Verificar, y en su caso, supervisar el cumplimiento de todas las funciones de la Unidad Estatal de Protección Civil;

V.- Las demás funciones que le confieran esta Ley, el Consejo Estatal, el Presidente o el Secretario Ejecutivo.

Art. 26.- Corresponde al Secretario Técnico:

I.- Elaborar y someter a la consideración del Secretario Ejecutivo, el proyecto de calendario de sesiones del Consejo Estatal, por conducto del Coordinador Administrativo;

II.- Convocar por escrito a las sesiones ordinarias del Consejo Estatal y a las extraordinarias cuando el Presidente así lo determine;

III.- Verificar que el quórum legal para cada sesión se encuentre integrado y comunicarlo al Presidente del Consejo Estatal;

IV.- Levantar las actas del Consejo Estatal;

V.- Elaborar y mantener actualizados los directorios del Sistema Estatal;

VI.- Dar cuenta al Consejo Estatal de los requerimientos de la Unidad Estatal de Protección Civil; y

VII.- Las demás funciones que le confiera esta Ley, el Consejo Estatal, el Presidente, el Secretario Ejecutivo o el Coordinador Administrativo.

ART. 27.- Cuando se presente un alto riesgo, emergencia o desastre en la entidad, el Consejo Estatal, se erigirá en Centro Estatal de Operaciones, al que se integrarán los responsables de las dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal y Federales que se encuentren establecidas en la Entidad, así como representantes de los sectores social, privado, científico, académico y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada.

ART. 28.- Compete al Consejo estatal como Centro Estatal de Operaciones:

I.- Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia;

II.- Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios y acciones a seguir; y

III.- Aplicar el plan de emergencia o los programas aprobados por el Consejo Estatal, y asegurar la adecuada coordinación de las acciones que realicen los grupos voluntarios.

CAPITULO IV DE LA UNIDAD ESTATAL

ART. 29.- La Unidad Estatal, es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, cuya función es proponer, dirigir, presupuestar y vigilar las acciones de protección civil con apego a esta Ley, en coordinación con los sectores público, social, privado, grupos voluntarios y la población en general.

ART. 30.- La Unidad Estatal se integrará por:

I.- Un Director, designado por el Gobernador del Estado; y

II.- Con la estructura que al efecto apruebe el Consejo Estatal a propuesta de su Presidente.

ART. 31.- Son atribuciones de la Unidad Estatal:

I.- Elaborar y presentar al Secretario Ejecutivo el anteproyecto del Programa Estatal, por conducto del Coordinador Administrativo;

II.- Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles para hacer frente a un riesgo, emergencia o desastre;

III.- Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio y recuperación para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, emergencia o desastre, garantizando el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;

IV.- Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de protección civil;

V.- Coadyuvar en la promoción de una cultura de protección civil;

VI.- Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de eficientes y oportunos canales de colaboración entre el Estado y los Municipios en materia de protección civil;

VII.- Identificar los riesgos que se presentan en la Entidad, integrando el atlas correspondiente y apoyar a las unidades municipales para la elaboración de sus mapas de riesgos;

VIII.- Promover la integración de las unidades internas de protección civil en las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, y de la federal establecidas en la entidad y de manera supletoria en las municipales;

IX.- Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades internas de protección civil y promover su participación en las acciones de protección civil;

X.- Llevar el registro, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntarios;

XI.- Establecer y operar los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población afectada por un desastre;

XII.- Elaborar los programas especiales de protección civil que se requieran de acuerdo con los riesgos identificados en el Estado y proponerlos al Consejo Estatal para su aprobación;

XIII.- Establecer el sistema de información de cobertura estatal en la materia. Este sistema deberá contar con mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en la Entidad;

XIV.- Registrar y validar la presencia de organismos especializados en atención de emergencias en la Entidad;

XV.- En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la magnitud de la misma, presentando de inmediato esta información al Consejo Estatal y al Centro de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación;

XVI.- Fomentar la participación ciudadana, en la prevención de desastres y en las tareas de auxilio y recuperación cuando estén en aptitud de hacerlo;

XVII.- Llevar el registro de las personas que realicen acciones destacadas de protección civil;

XVIII.- Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u organizaciones gubernamentales, sociales, privadas y grupos voluntarios que realicen acciones relevantes en materia de protección civil;

XIX.- Obtener de los medios de comunicación masiva electrónicos o escritos, el apoyo necesario para llevar a cabo campañas permanentes de difusión; y

XX.- Las demás que le asigne la presente Ley.

ART. 32.- Los titulares de las dependencias del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos serán responsables en el área de su competencia, conforme al Reglamento respectivo, de los programas de protección civil, su operatividad y coordinación.

ART. 33.- La Dirección Estatal promoverá que las escuelas, institutos, oficinas, empresas sean fábricas, industrias o comercios, y demás establecimientos públicos o privados, instalen sus propias unidades internas de protección civil, asesorándolas y coordinando sus acciones directamente o a través de las unidades municipales, esos mismos establecimientos deberán realizar, cuando menos dos veces al año simulacros para hacer frente a riesgos, emergencias o desastres.

ART. 34.- La Unidad Estatal administrará las instalaciones, equipo y materiales necesarios para su eficaz funcionamiento, los cuales serán proporcionados por el Gobierno del Estado.

ART. 35.- La Unidad Estatal podrá recibir donativos en efectivo o en especie de personas, dependencias del Gobierno Federal, del sector privado y de organismos internacionales.

ART. 36.- Como una alternativa de financiamiento, la Unidad Estatal deberá realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para obtener la autorización de recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta para sus donantes.

ART. 37.- La Unidad Estatal operará coordinadamente con la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

ART. 38.- Para ser Director de la Unidad Estatal, se requiere:

- I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;
- II.- Tener cuando menos 21 años cumplidos el día de su designación;
- III.- Residir en el Estado, cuando menos seis meses anteriores a su nombramiento;
- IV.- Contar con experiencia y conocimientos en la materia;
- V.- No desempeñar cargo de Dirección en partido político al momento de su designación, ni durante su desempeño; y
- VI.- No haber sido condenado por delito doloso.

CAPITULO V DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES

ART. 39.- En cada Municipio del Estado se establecerá un Sistema de Protección Civil, con el objeto de organizar el primer nivel de respuesta ante situaciones de riesgo, emergencia o desastre, mismo que será encabezado por el Presidente Municipal, y cuya estructura y operación, será determinada por el Ayuntamiento correspondiente.

ART. 40.- Los sistemas municipales, a través de la unidad correspondiente, estudiarán las formas para prevenir los desastres, reducir y mitigar sus efectos, debiendo desarrollar sus programas en coordinación con la Unidad Estatal.

ART. 41.- En caso de que los efectos de un alto riesgo, emergencia o desastre rebasen la capacidad de respuesta del correspondiente sistema municipal, el Presidente Municipal solicitará de inmediato el apoyo del Sistema Estatal, quien deberá prestar la ayuda respectiva en forma expedita.

ART. 42.- Los sistemas municipales, sin importar la forma de organización que hayan adoptado, deberán cumplir con los siguientes objetivos:

- I.- Elaborar y ejecutar el programa Municipal;
- II.- Promover una cultura de protección civil, desarrollando acciones de educación y capacitación a la población, en coordinación con las autoridades de la materia;
- III.- Fomentar la participación activa y responsable de todos los habitantes del Municipio;
- IV.- Prestar y coordinar el auxilio a la población en caso de que acontezca un alto riesgo, emergencia o desastre;

V.- Registrar los cuerpos de auxilio y rescate oficiales y voluntarios, coordinando su participación en caso de que sea necesario;

VI.- Diseñar y llevar a cabo campañas masivas de divulgación en materia de protección civil;

VII.- Elaborar el respectivo Mapa Municipal de Riesgos;

VIII.- Convocar a funcionarios públicos y a representantes de los sectores social, privado y grupos voluntarios para integrar el Centro Municipal de Operaciones;

IX.- Promover el equipamiento de los cuerpos de respuesta;

X.- Informar, por razones de coordinación y actualización de estadísticas, el Consejo Estatal de Protección Civil, cuando éste así lo requiera, sobre los incidentes de riesgo presentados durante un período determinado; y

XI.- Las demás que acuerde el propio Sistema Municipal.

ART. 43.- Los Sistemas Municipales, a través de sus Presidentes, con aprobación del Cabildo, podrán suscribir convenios de colaboración en materia de protección civil.

CAPITULO VI DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

ART. 44.- Esta Ley reconocerá como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones que reúnan los requisitos señalados en la fracción XV del artículo 3 de este Ordenamiento.

ART. 45.- Los grupos voluntarios deberán organizarse conforme a las siguientes bases:

- I.- **Territoriales:** Formados por los habitantes de una colonia, de una zona, de un centro de población, de uno o varios municipios o del Estado;
- II.- **Profesionales o de oficios:** Constituidos de acuerdo a la profesión y oficio que tengan; y
- III.- **De actividades específicas:** Atendiendo a la función de auxilio que desempeñen, constituidos por personas dedicadas a realizar acciones concretas de rescate, salvamento, etc.

ART. 46.- Los grupos voluntarios internacionales, nacionales, regionales o los organizados en términos del artículo anterior, que deseen participar en las acciones de protección civil, deberán inscribirse ante la Unidad Estatal o Municipal que corresponda. La solicitud de inscripción contendrá los siguientes datos:

- I.- Acta Constitutiva, y en su caso, domicilio del grupo en la Entidad;
- II.- Padrón;
- III.- Relación del equipo con el que cuenta; y
- IV.- Programa de Capacitación y Adiestramiento.

ART. 47.- Las unidades ante las que se registren, expedirán una constancia en la que se asentarán los datos referidos en el artículo anterior.

ART. 48.- Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán constituirse en grupos voluntarios organizados o integrarse a uno ya registrado, a fin de recibir información, capacitación y realizar en forma coordinada las acciones de protección civil.

ART. 49.- La capacitación de los grupos voluntarios deberá complementarse con la ejecución de ejercicios y simulacros.

ART. 50.- Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios:

I.- Gozar del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro, con la publicación que se haga de éste, en el periódico Oficial del Gobierno del Estado;

II.- Considerar a sus programas de capacitación y adiestramiento como parte del Programa Estatal;

III.- Solicitar el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y municipales para el desarrollo de sus actividades;

IV.- Recibir del Gobierno estímulos por acciones realizadas en beneficio de la población;

V.- Contar con un directorio actualizado de sus integrantes;

VI.- Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;

VII.- Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de una emergencia o de un inminente o probable riesgo de desastre;

VIII.- Coordinarse bajo el mando de las autoridades ante la presencia de un alto riesgo, emergencia o desastre;

IX.- Refrendar anualmente su registro ante la autoridad que corresponda; y

X.- Participar en todas aquellas actividades del Programa Estatal que estén en posibilidad de realizar.

CAPITULO VII DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCION CIVIL EN LAS EMPRESAS

ART. 51.- Es obligación de las empresas asentadas en el territorio estatal, cualquiera que sea su actividad, contar con una unidad interna de protección civil, capacitar a sus integrantes y dotarlos del equipo necesario para integrar los cuerpos de respuesta ante la contingencia de un alto riesgo, emergencia o desastre.

ART. 52.- Las unidades internas de protección civil de las empresas, se coordinarán con las comisiones mixtas de seguridad e higiene, y tendrán la obligación de promover y ejecutar las acciones conducentes para prevenir los riesgos que pongan en peligro la vida de los trabajadores, sean originados por la actividad misma de la empresa o por fenómenos perturbadores naturales o humanos, sin perjuicio de lo que establece la Legislación Laboral. Las comisiones mixtas de seguridad e higiene podrán realizar las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en dichas empresas.

ART. 53.- En las unidades internas participarán los trabajadores y los patrones o los representantes de estos últimos.

ART. 54.- El establecimiento de las unidades internas en las empresas, se realizará en coordinación con las unidades estatales o municipales de protección civil.

ART. 55.- Para la integración de las unidades internas de protección civil en las empresas, se preferirá en igualdad de circunstancias a quienes posean conocimientos en materia de protección civil.

CAPITULO VIII DEL PROGRAMA ESTATAL

ART. 56.- El Programa Estatal es el conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y acciones que se realizan en tiempo y lugar determinados, para cumplir con los objetivos del Sistema Estatal.

ART. 57.- Los Sistemas Municipales contarán con su programas en los mismos términos y serán parte del Programa Estatal.

ART. 58.- Tanto el Programa Estatal como los municipales, se ajustarán a los lineamientos que establece el Programa Nacional de Protección Civil.

ART. 59.- Los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo deberán contener un apartado relativo a los programas de protección civil, y será responsabilidad de las autoridades

estatales y municipales, proponer su inclusión en los Convenios de Desarrollo Social.

ART. 60.- Una vez que el Consejo haya aprobado el Programa Estatal, el Gobernador del Estado ordenará su publicación en el Periódico Oficial de la Entidad.

ART. 61.- En el caso de que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera grave a la población, se podrán elaborar programas especiales de protección civil.

ART. 62.- El Programa Estatal deberá ser revisado y actualizado anualmente.

CAPITULO IX DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ART. 63.- El Consejo Estatal de Protección Civil, en los casos de alto riesgo, podrá emitir una declaratoria formal de emergencia, la que comunicará de inmediato al Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno, y se difundirá a través de los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos.

ART. 64.- La declaratoria de emergencia hará mención expresa entre otros, de los siguientes aspectos:

I.- Identificación del alto riesgo o inminente desastre;

II.- Infraestructura, bienes y sistemas afectables;

III.- Determinación de las acciones de prevención y auxilio;

IV.- Suspensión de actividades públicas y privadas que así lo ameriten; y

V.- Instrucciones dirigidas a la población de acuerdo al Programa Estatal,

ART. 65.- El Consejo Estatal de Protección Civil, una vez que la situación de emergencia haya terminado, lo comunicará formalmente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 63 de esta Ley.

ART. 66.- En lo conducente, se aplicarán a nivel municipal las disposiciones de este capítulo, siendo el responsable de llevar a cabo la declaratoria formal de emergencia, el Presidente Municipal en sesión de Cabildo.

ART. 67.- Se considerará zona de emergencia de nivel municipal, aquella en la que para hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno perturbador, no se requiera de la ayuda estatal.

CAPITULO X DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE

ART. 68.- Se considerará zona de desastre de aplicación de recursos del Estado, aquella en la que para hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno perturbador, sean insuficientes los recursos del o los municipios afectados, requiriéndose en consecuencia la ayuda del Gobierno Estatal. En estos casos, el Gobernador del Estado pondrá en marcha las acciones necesarias por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil.

ART. 69.- Para que el Gobernador del Estado formule la declaratoria a que se refiere el artículo precedente, deberá agotarse el siguiente procedimiento:

I.- Que sea solicitado por el o los Presidentes Municipales de los municipios afectados;

II.- Que las dependencias del Poder Ejecutivo, encabezadas por la Secretaría General de Gobierno, realicen una evaluación de los daños causados; y

III.- Que de la evaluación, resulte necesaria la ayuda del Gobierno Estatal a que se refiere el artículo anterior.

ART. 70.- Las medidas que el Gobierno del Estado podrá adoptar cuando se haya declarado formalmente zona de desastre de aplicación de recursos estatales, son las siguientes:

- I.- Atención médica inmediata y gratuita;
- II.- Alojamiento, alimentación y recreación;
- III.- Restablecimiento de los servicios públicos afectados;
- IV.- Suspensión temporal de las relaciones laborales, sin perjuicio para el trabajador;
- V.- Suspensión de las actividades escolares en tanto se vuelve a la normalidad;
- VI.- Decretar la suspensión temporal de las obligaciones hacendarias establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;
- VII.- Decretar la suspensión temporal de obligaciones entre particulares, en tanto se retorna a la normalidad; y
- VIII.- Las demás que determine el Consejo Estatal.

ART. 71.- La declaratoria formal de zona de desastre de aplicación de recursos estatales, se hará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 65 de este Ordenamiento, y concluirá cuando así se comunique por el Gobernador del Estado.

ART. 72.- Para el caso de que la zona de desastre se declare a nivel municipal, se aplicarán en lo conducente, las disposiciones de este capítulo.

CAPITULO XI DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL CON LOS SISTEMAS NACIONAL Y MUNICIPALES

ART. 73.- La coordinación que establezca el Sistema Estatal con el Sistema Nacional y los Sistemas Municipales, tendrá por objeto precisar:

- I.- Las acciones que correspondan a cada sistema para atender los riesgos específicos que se presenten en la Entidad, relacionados con sus atribuciones;
- II.- Las formas de cooperación con las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal en el Estado y de los municipios, acordando las responsabilidades y acciones que asumirán en materia de protección civil;
- III.- Los medios que permitan identificar, registrar y controlar a nivel municipal y estatal, las actividades que representen peligro y que se desarrollen en la Entidad bajo regulación federal; y
- IV.- Los medios de comunicación entre los órganos operativos para coordinar acciones, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre.

ART. 74.- La Unidad Estatal, en coordinación con las dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, llevará un registro de las empresas establecidas en la Entidad, con el fin de promover la integración y vigilar el funcionamiento de las unidades internas de protección civil de éstas.

CAPITULO XII DE LA DENUNCIA POPULAR

ART. 75.- Toda persona tiene la obligación de denunciar ante la Unidad Estatal o Municipal de Protección Civil, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre de éstas.

ART. 76.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona.

ART. 77.- Una vez recibida la denuncia, la instancia que la recibió, dará parte de inmediato a las autoridades federales, estatales o municipales bajo cuya responsabilidad se encuentre la obligación de actuar técnica o administrativamente para hacer frente al alto riesgo, emergencia o desastre.

ART. 78.- La dependencia y unidad de protección civil respectivas, efectuarán conjuntamente las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados y tomarán las medidas que el caso amerite.

ART. 79.- Cuando por negligencia, acción u omisión a las disposiciones contenidas en esta Ley, se hubieren ocasionado daños o perjuicios, a los bienes inmuebles o a las personas, él o los interesados podrán solicitar a la Unidad de Protección Civil que corresponda, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba pericial, en caso de ser presentado en juicio.

ART. 80.- Las Unidades de Protección Civil competentes en los términos de esta Ley, atenderán de manera permanente al público, en el ejercicio de la denuncia popular. Para ello, difundirán ampliamente el domicilio y números telefónicos destinados a recibir las denuncias.

ART. 81.- De la denuncia y de todo el procedimiento referido en este Capítulo, la autoridad levantará acta circunstanciada en tres tantos; el original se quedará en poder de la Unidad de Protección Civil; otro en poder de la autoridad implicada y el tercer tanto deberá ser entregado al denunciante. La Unidad de Protección Civil respectiva, tiene la obligación de entregar copia legible al denunciante de todo el procedimiento hasta su conclusión.

ART. 82.- Los funcionarios de la Unidad de Protección Civil que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior, incurrirán en responsabilidad oficial, debiendo ser sancionados conforme a lo que establezcan los ordenamientos aplicables.

CAPITULO XIII DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ART. 83.- En caso de riesgo, las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, ejecutarán las medidas de seguridad que les competan a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, garantizando el normal funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

ART. 84.- Entre las medidas de seguridad se cuentan:

- I.- Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;
- II.- Acciones preventivas a realizar, según la naturaleza del riesgo;
- III.- La suspensión de actividades, obras o servicios;
- IV.- El resguardo, o en su caso, destrucción de objetos, productos y sustancias que puedan ocasionar desastres; y
- V.- Las demás que en materia de protección civil determinen las autoridades competentes, tendientes a evitar que se generen o sigan causando riesgos.

CAPITULO XIV DE LAS VERIFICACIONES

ART. 85.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por verificación, el acto de la autoridad administrativa competente por medio del cual comprueba el cumplimiento de los requisitos para la construcción y funcionamiento de la infraestructura urbana y de los bienes inmuebles de los sectores público, social y privado.

ART. 86.- De las verificaciones, se levantará acta circunstanciada por triplicado, debiendo el verificador, entregar una copia legible al propietario del inmueble, poseedor o administrador, o en su caso, al representante legal, y la otra la enviará a la Unidad de Protección Civil que corresponda.

ART. 87.- De la verificación realizada, la autoridad emitirá el dictamen respectivo, notificándolo al interesado y a la Unidad de Protección Civil que corresponda, asegurándose ésta, que se cumplan los puntos resolutive del dictamen.

CAPITULO XV DE LAS RESPONSABILIDADES

ART. 88.- Se consideran conductas constitutivas de responsabilidad:

I.- Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan las acciones de prevención, auxilio y recuperación de la población ante la contingencia de un desastre;

II.- No dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente que imponga cualquier medida de seguridad; y

III.- En general, cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones de esta Ley o de aquellas contenidas en otros ordenamientos, que por cualquier motivo puedan causar algún riesgo de desastre.

ART. 89.- Las autoridades, las personas físicas o morales que conforme a las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables, cuyo objeto sea de manera directa o indirecta la reglamentación en materia de protección civil, serán responsables administrativa, civil o penalmente por las acciones u omisiones que violen tales disposiciones. Se establece acción popular para denunciar este tipo de actos o abstenciones.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el Decreto N° 54 que creó el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Durango, de fecha 29 de diciembre de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 23 Bis. de fecha 22 de marzo de 1990; en todo lo que se oponga a la presente Ley.

ARTICULO TERCERO.- En virtud de que la presente Ley no modifica sustancialmente la integración del Consejo Estatal de Protección Civil, éste continuará funcionando en la forma en que actualmente se encuentra constituido, sin necesidad de instalarlo de nueva cuenta. Lo anterior, sin perjuicio de hacer las adecuaciones pertinentes, de acuerdo con la nueva normatividad.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado en Victoria de Durango, Dgo., a 29 de Octubre del año de (1996) mil novecientos noventa y seis.

DIP. ROMULO DE JESUS CAMPUZANO GONZALEZ.
PRESIDENTE.

DIP. JAVIER COVARRUBIAS VAZQUEZ.
SECRETARIO.

DIP. JAVIER CORRAL CORRAL.
SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y comuníquese a quienes corresponda para su exacta observancia.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, en Victoria de Durango, Dgo., a los veintinueve días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. ALFREDO BRACHO BARBOSA.

EL CIUDADANO LICENCIADO MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, a sus habitantes, s a b e d:

Que la H. Legislatura del mismo se ha servido dirigirme el siguiente:

Con fecha 10 de Octubre del presente año, el C. Presidente Municipal de Canelas, Dgo., envío a esta H. LX Legislatura Local, Iniciativa de Decreto, en la que solicita autorización para contratar con BANOBRAS, S.N.C., un crédito hasta por la cantidad de: \$219,000.00, con el objeto de cubrir el costo de la adquisición de dos camionetas, misma que fue turnada a la Comisión de Finanzas integrada por los CC. Diputados Julián Salvador Reyes, Santiago Gustavo Pedro Cortes, J. Rubén Escajeda Jiménez, Jesús Salvador Salum del Palacio y Javier Covarrubias Vázquez, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, mismos que emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que la Solicitud del H. Ayuntamiento del Municipio de Canelas, Dgo., dirigida a esta Representación Popular, se hizo con base en el Acuerdo de Cabildo tomado en la Sesión celebrada el día 27 de Julio del año en curso, y de la cual se acompaña la Certificación correspondiente; observándose claramente, que aquel Cuerpo Colegiado ha estimado la necesidad de dotar con los instrumentos y equipo de trabajo para cumplir con eficiencia las labores propias de dicho Ayuntamiento, por lo que actualmente se requiere la adquisición de dos camionetas, una pick up de 8 cilindros y otra de 3 toneladas que serán utilizadas para uso exclusivo del H. Ayuntamiento de Canelas, Dgo.

SEGUNDO.- En virtud de que la intención del Honorable Cabildo de Canelas, Dgo., es como se ha mencionado prestar en la medida de lo posible con rapidez y eficiencia los servicios tanto administrativos como públicos que demandan los habitantes de aquel municipio, a la Comisión que dictaminó no le pasó inadvertida la lejanía, ubicación geográfica, dificultad de las vías de comunicación, aspectos que sin duda se complican ante la carencia de vehículos adecuados para trasladarse con seguridad, así como para transportar toda clase de materiales que se requieren y de esa manera atender rápida y adecuadamente las necesidades propias del cargo que se esta desempeñando.

TERCERO.- Que por otra parte, y en virtud a que el Honorable Ayuntamiento de Canelas, Dgo., determinó, de acuerdo a la ley

y a la prioridad de sus necesidades, la autorización para concertar el crédito mencionado, ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y además, constatando la Comisión que dictaminó, que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de su política gubernamental, ha otorgado el más amplio apoyo a los Municipios de nuestra Entidad Federativa, procurando su desarrollo, y por ende, ha aceptado en múltiples ocasiones, constituirse, a petición de los propios Ayuntamientos, en Deudor Solidario de las líneas de crédito que se contratan.

Con base en los anteriores considerandos, la H. LX Legislatura del Estado, expide el siguiente:!

DECRETO No. 162

LA H. SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Canelas, Dgo., para que por conducto de su Ayuntamiento Municipal, gestione y contrate con el BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., en uso de los recursos propios del Banco, el otorgamiento de un crédito hasta por la suma de: \$ 219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) mismo importe que podrá ser incrementado hasta en un 25% más si lo concede el Banco Acreditante, sin que para ello se requiera de una nueva autorización legislativa, sujetándose esa ampliación a la tasa de interés con que opere el Banco a la fecha en que sea concedida.

ARTICULO SEGUNDO.- El crédito a que se refiere el artículo anterior, se destinará precisa y exclusivamente a cubrir el costo de la adquisición de dos camionetas, una Pick-Up de 8 cilindros y otra de 3 toneladas, que serán utilizadas para uso exclusivo de la Presidencia de Canelas, Dgo., así como los conceptos adicionales correspondientes a impuesto al valor agregado, comisión por apertura, comisión por disposición e I.V.A. de las comisiones por parte del Banco Acreditante y, en su caso, los intereses del período de inversión y/o gracia. En caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir el costo total de estos conceptos,

el Ayuntamiento aportará los recursos faltantes con fondos propios.

ARTICULO TERCERO.- La adquisición le será adjudicada al proveedor conforme a los procedimientos de licitación aprobados por el Banco, según lo que se establezca al respecto en el Contrato de Apertura de Crédito.

ARTICULO CUARTO.- Las cantidades de que disponga el citado Ayuntamiento en ejercicio del crédito, causarán intereses normales sobre saldos insolutos a la tasa de (1.12) T.IIE con una TASA PISO DE T.IIE + 3.5 y una TASA TECHO DE T.IIE + 10.5 revisable mensualmente, siendo dicha tasa la autorizada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por el Banco de México.

En caso de mora por falta de pago oportuno de cualquiera de las obligaciones a cargo del citado Ayuntamiento, además de los intereses normales, se causarán intereses moratorios calculados a la tasa que resulte de aplicar 0.5 veces la tasa del crédito, utilizando la tasa vigente en la fecha en que el acreditado debiera haber cubierto la obligación.

ARTICULO QUINTO.- El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a su cargo conforme al Contrato de Crédito, será pagado por el citado Ayuntamiento al Banco Acreditante en el plazo que se convenga, pero que no exceda de 36 meses mediante exhibiciones y pagos que comprendan capital e intereses y sean fijados en el Contrato y en la Tabla de Amortización correspondiente y, en atención a la Solicitud formulada por el H. Ayuntamiento de Canelas, Dgo., al respecto se le autoriza expresamente a la celebración de este Contrato.

ARTICULO SEXTO.- Se faculta igualmente al H. Ayuntamiento de Canelas, Dgo., para que, como fuente de pago del crédito, afecte a favor del Banco el producto de la cobranza de las cuotas o derechos a cargo de los beneficiarios con la adquisición objeto de la inversión del crédito y cualquier otro ingreso que proceda del uso o explotación de la citada adquisición financiada.

Para el caso de que no pueda aplicarse o resulte insuficiente esa fuente de pago, se afectarán las partidas presupuestales que el Ayuntamiento y, en su caso, el Gobierno de esta Entidad Federativa, se obliguen a incluir en sus presupuestos

anuales de egresos, complementando esta fuente de pago, cuando así se requiera, con cualquier otro ingreso disponible de la Hacienda Pública Municipal.

ARTICULO SEPTIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento antes mencionado para que, en garantía del cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de la contratación del crédito, afecte a favor del Banco Acreditante las participaciones presentes y futuras que en impuestos federales correspondan al Municipio, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que se inscribirá en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTICULO OCTAVO.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para que constituya a esta Entidad Federativa como deudora solidaria por todas y cada una de las obligaciones a cargo del acreditado, derivadas del Contrato en que se formalice la apertura del crédito que se autoriza, y para que, en garantía del cumplimiento de esas obligaciones, afecte las participaciones presentes y futuras que en impuestos federales correspondan al Estado, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que igualmente se inscribirá en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal como se menciona en el artículo anterior.

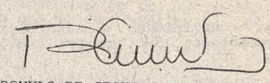
ARTICULO NOVENO.- Se autoriza al citado Ayuntamiento y al Gobierno del Estado para que pacten todas las condiciones y modalidades que estimen necesarias o convenientes en el contrato relativo a las operaciones a que se refiere este Decreto, y para que comparezcan a firma del mismo Contrato por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente investidos.


TRANSITORIO:


U N I C O .- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial del Estado.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (30) treinta días del mes de Octubre del año de (1996) mil novecientos noventa y seis.


DIP. ROMULO DE JESUS CAMPUZANO GONZALEZ
PRESIDENTE.


DIP. JAVIER COVARRUBIAS VAZQUEZ
SECRETARIO.


DIP. JAVIER CORRAL CORRAL
SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y comuníquese a quienes corresponda para su exacta observancia.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, en Victoria de Durango, Dgo., a los treinta días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. ALFREDO BRACHO BARBOSA.

EL CIUDADANO LICENCIADO MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
DURANGO, a sus habitantes, s a b e d s

Que la H. Legislatura del mismo se ha servido dirigirme el siguiente:

Con fecha 10 de Octubre del año de 1996, el Titular del Poder Ejecutivo, envió a esta H. LX Legislatura Local, Iniciativa de Decreto que contiene REFORMAS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA FRUTICULTURA PARA EL ESTADO DE DURANGO, misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Agrícolas Frutícolas y Pecuarias, integrada por los CC. Diputados Romulo de Jesús Campuzano González, Armando Rodríguez Morales, Cesáreo Coronado Mesta, Rafael Palacios Alvarado y Antonino González González, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, mismos que emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Que con fecha 22 de junio de 1987, la H. LVII Legislatura del Estado, expidió mediante Decreto No. 44, la Ley de Fomento y Protección a la Fruticultura para el Estado de Durango, misma que fué publicada en el Periódico Oficial No. 51 Bis. de fecha 26 de junio de 1988.

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Constitución Política Local y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, han sido reformadas de modo tal que se ha cambiado la denominación de varias Secretarías de Estado, así como la designación de las dependencias integrantes del Ejecutivo Estatal; y siendo que la Ley que se reforma, hace alusión a diversas dependencias federales y estatales, cuyo nombre ha cambiado, se hace necesario adecuar el ordenamiento jurídico, con el fin de evitar la falta de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley.

Con base en los anteriores considerandos, la H. LX Legislatura del Estado, expide el siguiente:

D E C R E T O No. 163

LA HONORABLE SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, D E C R E T A :

ARTICULO UNICO: Se reforman los Artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14°, y 15° de la LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA FRUTICULTURA PARA EL ESTADO DE DURANGO, para quedar como sigue:

Artículo 2°.- Las campañas para combatir las plagas y enfermedades que atacan a los árboles frutales, se regirán por la normatividad federal que será aplicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las contenidas en la presente Ley, por el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado, de las Uniones de Fruticultores, de los Ejidos, Comuneros y Pequeños Propietarios dedicados a la fruticultura y/o a su industrialización en el Estado de Durango. Estas campañas abarcan, desde el punto de vista técnico, la totalidad de los árboles frutales de la región de que se trate, estén o no en producción y de las áreas inmediatamente contiguas que por sus características, puedan propiciar la aparición o permanencia de plagas o enfermedades.

Artículo 3°.- Es obligación de todo fruticultor o industrial frutícola, informar a la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y a los organismos regionales a que más adelante se refiere la presente Ley, inmediatamente que aparezca la presencia de cualquier plaga o enfermedad en algunos de sus árboles o instalaciones y de denunciar cuando tenga conocimiento de ellas, la aparición de plagas o enfermedades en aquellos árboles o instalaciones que, no estando en sus terrenos puedan constituir un peligro para su patrimonio, a fin de que se tomen las medidas adecuadas de control o extinción.

Artículo 4°.- Todo fruticultor o industrial frutícola está obligado a propiciar las condiciones y facilitar el acceso a sus terrenos e instalaciones, a los inspectores debidamente acreditados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como a los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y a los organismos regionales que para el caso se organicen en términos de esta Ley, con el objeto de comprobar la presencia o ausencia de las plagas o enfermedades en sus instalaciones o terrenos de su propiedad o de los que tengan en posesión o en arrendamiento o usufructo.

Artículo 5°.- Para facilitar a la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la

aplicación de la Normatividad Federal y para lograr la más ágil y eficaz atención de las actividades que se requieran en cada región frutícola del Estado, para el combate de las plagas y enfermedades que afecten o puedan afectar la producción frutícola, así como para lograr la mayor tecnificación de todos los aspectos de la fruticultura, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, organizará en cada Zona un COMITÉ REGIONAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION A LA FRUTICULTURA, delimitando en cada caso, su zona de influencia dentro de la cual podrá organizar Comités locales cuando estime necesario, para coadyuvar en las labores del Comité Regional.

Artículo 6°.- Cada uno de los Comités Regionales a que se refiere el artículo anterior, estará integrado por un representante de cada Asociación Rural de Interés Colectivo de la región frutícola; un representante por cada Unión de Ejidos que se encuentre en la zona; un representante de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores; un representante de los Productores Empacadores Distribuidores de Manzana del Estado de Durango, A. C. (PREDIMAC); un representante de cada una de las Presidencias Municipales de Canatlán, Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro; un representante del Gobierno del Estado; y un representante del Comité Estatal de Sanidad vegetal.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, actuará como organismo normativo de las campañas que se realicen dentro del Comité y tendrá derecho a voz y el resto de los representantes tendrán derecho a voz y voto.

Cada representante Propietario tendrá un Suplente, quien actuará en las Juntas del Comité Regional, en ausencia del respectivo Propietario.

Artículo 7°.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado, solicitará a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; a las Uniones de Ejidos; a la Unión Agrícola Regional de Fruticultores; a los Productores Empacadores Distribuidores de Manzana del Estado de Durango, A.C. (PREDIMAC); a las Presidencias Municipales de Canatlán, Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro; y al Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el nombramiento de sus respectivos representantes propietarios y suplentes, para los efectos señalados en el artículo anterior.

Artículo 8°.- El representante de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,

actuará como normativo de las campañas que se realicen dentro del Comité, y el Gobierno del Estado fungirá siempre como Presidente del Consejo de Vigilancia de dicho Comité.

Artículo 9°.- Los Representantes Propietarios elegirán a un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que deberán ser productores de alguna de las organizaciones acreditadas del Comité. Los representantes, tanto Propietarios como Suplentes, subsistirán como tales, mientras tanto sus respectivos representantes no dejen sin efecto el nombramiento expedido a su favor y extiendan nuevo nombramiento a favor de otra persona.

El Presidente de cada Comité Regional desempeñará su cargo por un periodo de tres años, pudiendo ser reelecto conforme a lo dispuesto por el presente artículo.

Artículo 10.- Será responsabilidad de cada Comité Regional dentro de su área de influencia, la promoción y ejecución de las actividades a que se refieren los Artículos 2 y 5 de esta Ley.

Artículo 11.- Cada Comité Regional elaborará su Reglamento Interior, el que deberá ser sometido a la aprobación de los Representantes Propietarios integrantes del Comité.

Artículo 14.- Con el fin de integrar el patrimonio de cada Comité Regional, según el punto primero del artículo anterior se establece un derecho anual de 0.95% del salario mínimo vigente del campo por reja de manzana de mesa, y un 0.095% por reja de manzana para industrialización con cargo a los propietarios de la huertas. La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado habilitará a un integrante de este organismo para recabar este derecho, de conformidad con las facultades que le otorga la Ley Económica Coactiva del Estado de Durango. El pago del derecho deberá hacerse a la salida de la manzana de la región. Dicho pago es obligatorio para todos los propietarios, usufructuarios o arrendatarios de los terrenos en producción, en el territorio de cada región de la Entidad en que el Ejecutivo del Estado, en uso de la facultad que le concede el Artículo 5 de esta Ley, organice el respectivo COMITE REGIONAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION A LA FRUTICULTURA.

Artículo 15.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para que, a solicitud debidamente fundamentada del respectivo Comité, envíe al H. Congreso del Estado, Iniciativa de Decreto, para que se incremente o se reduzca el importe del derecho 0.95% sobre el salario mínimo diario vigente en el campo, por reja de manzana de mesa y 0.095% para fruta de uso industrial, en la inteligencia de que no se autorizará ninguna reducción, mientras tanto hubiere algún saldo pendiente de liquidar, de créditos o de cualquier tipo de pasivo, o bien mientras la región encuentre afectada por alguna plaga o enfermedad.

TRANSITORIO

U N I C O : Las presentes reformas entrarán en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (5) cinco días del mes de Noviembre del año de (1996) mil novecientos noventa y seis.

DIP. JOSE OSCAR POSADA SANCHEZ
PRESIDENTE.

DIP. JAVIER COVARRUBIAS VAZQUEZ
SECRETARIO.

DIP. JAVIER CORRAL CORRAL
SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y comuníquese a quienes corresponda para su exacta observancia.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, en Victoria de Durango, Dgo., a los cinco días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. RAFAEL GARCIA ESPARZA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. ALFREDO BRACIO MURIOGA.

EL CIUDADANO LICENCIADO MAXIMILIANO SILERIO
ESPARZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE DURANGO, a sus habitantes, s a b e d:

Que la H. Legislatura del mismo se ha servido dirigirme el siguiente:

Con fecha 21 de Octubre del presente año el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, envió a esta H. Legislatura Local iniciativa de Decreto por la cual solicita sea otorgada la medalla "Francisco Villa", a la C. Aniceta Cárdenas Orozco de Rosales, el próximo 20 de noviembre del año en curso; la cual fué turnada a una Comisión Especial, integrada por los CC. Diputados J. Rubén Escajeda Jimenez, Javier Corral Corral, José Oscar Posada Sánchez, Gustavo Lugo Espinoza, Carmen Aide Quiñones Ruiz, Rafael Palacios Alvarado y Jesús Rene Sosa Curiel, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, mismos que emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que con fecha 30 de Octubre del año en curso, se acordó por el Pleno de la Honorable Asamblea, nombrar una Comisión Especial para hacer el estudio y análisis y, en su caso, el Decreto correspondiente, en relación con la Iniciativa.

SEGUNDO.- Que en opinión de la Comisión, resulta justo valorar y aquilatar en toda su extensión, las acciones de los hombres y mujeres de Durango, que de una forma u otra, se han significado por su labor social en nuestro Estado, ofreciendo lo mejor de sí mismos, otorgándoseles por ello, el Galardón a que se refiere el Decreto No.48 expedido el 28 de Junio de 1978, y de esta forma, incentivar y lograr la motivación debida para que las nuevas generaciones sigan impulsando acciones en beneficio y satisfacción de nuestra sociedad.

TERCERO.- Que la C. ANICETA CARDENAS OROZCO DE ROSALES, mejor conocida como "CHETA CARDENAS", es una mujer que se ha significado por su gran labor como luchadora social en el Estado de Durango. Nació en Chalchihuites, Zac., el 17 de Abril de 1910 en el Barrio del Colorado; los años cruentos de la lucha armada dejaron huella en su incipiente formación, y provocaron que su familia se trasladara a radicar a la ciudad de Durango cuando ella contaba con 10 años de edad; no pudo asistir a la escuela primaria para recibir la instrucción elemental por carecer sus padres de recursos, y no fue hasta la edad de 29 años cuando su hija mayor Carmen, le enseñó a leer y escribir, permitiendo lo anterior, consolidar sus inquietudes como líder de las causas más nobles de la población desprotegida de los barrios y colonias humildes.

En 1943, en asociación con destacados personajes de nuestro Estado, formó la Liga Inquilinaria, instrumentando en esa década importantes acciones de defensa para proteger a un gran número de ciudadanos de la voracidad de un grupo de propietarios que monopolizaban la vivienda, la mayor parte de ella constituida por insalubres vecindades, carentes de los servicios más elementales; su acción evitó desalojos e imposición de rentas arbitrarias. Poco después, al finalizar la década de los cuarenta, formó la Unión Femenil "Leona Vicario", organización que llegó a tener hasta cinco mil afiliados, que utilizaba estrategias revolucionarias para su época en el seguimiento de la gestoría y consecución de bienes y servicios, ya que en los años de la Post-Guerra se dió una escasez de granos básicos (maíz-frijol) agravada por una sequía, lo que motivó el acaparamiento y especulación de oportunistas comerciantes que medraban con la necesidad de las clases marginadas, por lo que se recuerda con emoción como la SRA. ANICETA CARDENAS implementó en ese tiempo grandes repartos de maíz y frijol en el Ex-Campo Deportivo contiguo al Ex-Cuartel Juárez, que vinieron a aliviar las grandes necesidades de esa época.

En 1956 fue Regidora en el Cabildo que presidió el Licenciado Rafael Hernández Piedra, cargo que utilizó para servir a sus semejantes, gestionando grandes apoyos ante los gobiernos municipal y estatal, acciones que prolongó aún después de concluido el ejercicio de su cargo.

Fue pionera en la lucha por el reconocimiento de los Derechos de la Mujer, asistiendo como Delegada a la Convención Nacional donde se promovió la Iniciativa que fue aprobada posteriormente por el Honorable Congreso de la Unión, reconociendo el Derecho al ejercicio del Voto a la Mujer, el 17 de Octubre de 1953, siendo en ese entonces Presidente de la República, el C. Lic. Don Adolfo Ruiz Cortines. Organizó en nuestro Estado, el Primer Comité Pro-Hogar Duranguense, beneficiando a centenares de ciudadanos en asentamientos ubicados en las Colonias Insurgentes, Empleados Municipales y IV Centenario, entre otras; asimismo, promovió la construcción de escuelas en dichas colonias y en poblaciones rurales como "Contreras" y "Navacoyán", en el Municipio de Durango; y en "Veracruz", Municipio de Poanas, Dgo.

Organizó y presidió el Comité Pro-Indulto, ayudando a obtener la libertad a centenares de personas, la mayoría de origen indígena, que por ignorancia o falta de recursos, tenían estancados sus procesos; también por iniciativa de la misma, se instituyó el "Día del Preso"; y en 1980, siendo Gobernador Sustituto del Estado el Dr. Salvador Gámiz Fernández, a iniciativa de la galardonada, se construyeron la "Casa de la Mujer" y la "Escuela de Capacitación de Arte y Oficios".

CUARTO.- Que por lo anterior, la Comisión que dictaminó, encontró que efectivamente, la C. ANICETA CARDENAS OROZCO DE ROSALES, por sus virtudes y su prolija labor social en beneficio del pueblo de Durango, cumple con los requisitos

señalados en el Artículo Primero del Decreto N° 48, expedido por la H. LIV Legislatura, en fecha 28 de Junio de 1978.

Con base en los anteriores Considerandos, la H. Legislatura del Estado, expide el siguiente:

DECRETO No. 164.

LA HONORABLE SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, **D E C R E T A :**

ARTICULO PRIMERO.- En pleno reconocimiento a la vida y obra de la C. **ANICETA CARDENAS OROZCO DE ROSALES**, se le otorga el Galardón denominado "PRESEA FRANCISCO VILLA", mismo que consiste en una Medalla y un Diploma "A LA VIRTUD Y AL MERITO".

ARTICULO SEGUNDO.- Las características de la Medalla serán como lo establece el Decreto N° 48 de la H. LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, expedido el 28 de Junio de 1978.

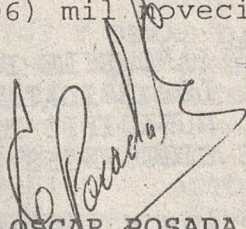
ARTICULO TERCERO.- La condecoración será impuesta en un Acto Especial en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el día **20 de Noviembre del año en curso**, a las 9:00 (nueve horas) fecha en que se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

T R A N S I T O R I O :

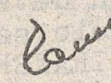
U N I C O .- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (12) doce días del mes de Noviembre del año de (1996) mil novecientos noventa y seis.



DIP. JOSE OSCAR POSADA SANCHEZ.
PRESIDENTE.



DIP. JAVIER COVARRUBIAS VAZQUEZ.
SECRETARIO.



DIP. JAVIER CORRAL CORRAL
SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y comuniquese a quienes corresponda para su exacta observancia.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, en Victoria de Durango, Dgo., a los doce días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.



EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. ALFREDO BRACHO BARBOSA.

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTES DEL ESTADO.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.

ANTE EL C. LIC. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LOS EJIDATARIOS Y VECINOS DEL EJIDO - VERACRUZ DE LA DIERRA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO., PRESENTARON SOLICITUD EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

"....Por este conducto los ejidatarios de San Dimas, Dgo., - nos permitimos recurrir a su amabilidad a fin de solicitar - su apoyo y comprensión para que un viejo anhelo se haga realidad: la autorización de UNA CONCESION DE TRANSPORTE, la - cual presenta dos opciones, de ser posible pública o en su defecto indicarnos oficialmente la autorización para la circulación de un camión de pasajeros, con capacidad de 20 personas para uso exclusivo de los ejidos Veracruz de la Sierra y Fresnos, del citado Municipio; lo que consideramos que no transgrede los intereses de la ruta: Durango; San Miguel de Cruces. Lo anterior es con el afín de brindar un mejor servicio y apoyo a nuestras familias campesinas. No omitimos - agregar a Usted, que este trámite se ha venido realizando -- desde hace aproximadamente seis años. Reconociendo en Usted el liderazgo y autoridad en bien del pueblo que gobierna, -- aprovechamos para saludarlo como el primer cenecista del --- Estado. anexamos las firmas de autoridades e interesados -- en este trámite....."

Lo que se publica en este periódico de conformidad con lo -- dispuesto por el Artículo 97 de la Ley de Tránsito y Transportes y 79 de su Reglamento, con el objeto de permitir a -- terceros que consideren se lesion rían sus intereses, intervengan en defensa de los mismo.

Victoria de Durango., Dgo., a 29 de Octubre de 1996.